

Actuar en presente, pensar en futuro



Introducción: orientados al mañana

Somos el Partido Nacional y reivindicamos nuestra historia. Estamos orgullosos de pertenecer a uno de los partidos más viejos del mundo y de prolongar una hermosa tradición. Lo que nos hace sentir orgullosos no es solamente el hecho de haber durado. Nos sentimos orgullosos porque, a lo largo de casi 180 años, hemos contribuido de manera decisiva a construir un país mejor. El Uruguay no sería lo que es si no hubiera tenido al Partido Nacional defendiendo valores que se han vuelto constitutivos de nuestra República.

Lo que nos mueve no es el pasado sino el futuro. Queremos seguir siendo protagonistas de la construcción de un país mejor para todos los uruguayos, incluyendo a los que han nacido y a los que están por nacer. Queremos incidir en el presente porque somos constructores de futuro. Somos más mañana que ayer.

Un país de libertad y valores

Nuestra bandera irrenunciable es, como fue siempre, la defensa de la libertad. Una libertad que empieza en la persona capaz de tomar decisiones autónomas, que se prolonga hacia la comunidad nacional, y finalmente se extiende a la región y a nuestras relaciones con el mundo. Creemos en una libertad respetuosa de la libertad del otro. Creemos en una libertad que reconoce y dialoga. Creemos en una libertad que ampara y que protege. Creemos en una libertad sensible y generosa.

Porque creemos en la libertad, estamos comprometidos con la defensa de las instituciones. Defendemos la democracia representativa, el Estado de Derecho, la división de poderes y el gobierno limitado. El poder sin Derecho es tiranía. Nosotros somos, como hemos sido siempre, Defensores de las Leyes.

Creemos en la política bien entendida y en el ejercicio activo de la ciudadanía. No queremos un país gobernado por burocracias opacas, ni por políticos que practican el capitalismo de amigos, ni por corporaciones centradas en la defensa de sus propios intereses. Queremos un país de ciudadanos. Con reglas claras. Con derechos y deberes bien definidos. Con mecanismos de control sobre los que gobiernan.

Creemos que la moralidad pública y la responsabilidad sobre las decisiones son los primeros deberes de quienes gobiernan. Queremos más transparencia y mejores mecanismos de rendición de cuentas.



Líneas de acción para los próximos años

Los valores en los que creemos nos marcan el rumbo de largo plazo. La situación que vive el país nos marca la agenda para los próximos años. Tenemos un plan de trabajo para el quinquenio, que apunta a tres objetivos fundamentales: aportar soluciones para los problemas que enfrenta el país; fortalecer al Partido Nacional como instrumento de cambio y de defensa de valores fundamentales; y alcanzar la victoria en las elecciones de 2019.

a) Una agenda de temas prioritarios

Plantear desde el Partido Nacional una agenda con miras al 2030 implica centrarnos en aquellos temas que comprometen el desarrollo sustentable del Uruguay. Nosotros queremos embarcarnos en esa tarea, con una perspectiva de mediano plazo y a través de un proceso de diálogo social que incluya a todos los interlocutores válidos. El objetivo es tender puentes para generar propuestas innovadoras y alianzas estratégicas que las sustenten. Queremos elaborar una visión de mediano plazo para la formulación de políticas públicas concretas.

En cada una de esas áreas temáticas que consideramos prioritarias vamos a aplicar un método de trabajo que tiene cuatro componentes.

El primero es el monitoreo constante de la situación, mediante un esfuerzo de diagnóstico que nos permita entender en tiempo real lo que está ocurriendo. Para lograrlo vamos a utilizar diferentes instrumentos de análisis, pero de manera especial vamos a apelar un diálogo directo y permanente con los involucrados en cada situación.

El segundo componente es un seguimiento muy de cerca de la gestión de gobierno: ¿qué está haciendo el gobierno del Frente Amplio para responder a los problemas existentes? ¿Cómo está aprovechando las oportunidades y recursos disponibles?

¿Qué efectos están teniendo sus políticas? ¿Qué cosas debería estar haciendo y no está haciendo?

El tercer componente es la elaboración de propuestas de corto y mediano plazo. ¿Cómo dar respuesta a los problemas que no están siendo atendidos? ¿Cómo prevenir dificultades futuras, que terminarán por afectarnos si no cambiamos el rumbo? ¿Cómo aprovechar mejor las oportunidades, capacidades y recursos disponibles?

El cuarto componente es convocar y escuchar a todos aquellos que desde su lugar tengan algo para aportar: las Universidades, los profesionales, los gremios, las ONGs, el mundo de la cultura, la producción, la empresa, entre otros.

En este documento abordaremos algunos temas que nos preocupan cuando miramos el mediano plazo. Ciertamente no son todos los que importan, sino aquellos a los que queremos prestar especial atención en la próxima etapa. Pero esto no significa que vayamos a abandonar otros temas sobre los que ya hemos hablado y seguiremos hablando públicamente.

• El desafío demográfico. Los resultados del Censo 2011 ubicaron la población del Uruguay en 3.390.077 habitantes. Esto implica que el ritmo de crecimiento poblacional se sigue reduciendo. En Uruguay solo 47.000 niños nacen por año. Si esta tendencia se mantiene, debemos esperar que cada vez menos gente ingrese al mercado de trabajo, al mismo tiempo que aumenta la población adulta mayor. Eso tendrá consecuencias, entre otras cosas, sobre el financiamiento de la seguridad social. Además ocurre que el crecimiento poblacional es desparejo: los hogares que concentran más nacimientos son los de bajos ingresos y menor nivel educativo. Esto plantea desafíos, en un mundo que cada vez más se orienta hacia una economía basada en el conocimiento y el cambio tecnológico.

Los uruguayos no estamos demasiado habituados a pensar en términos demográficos, como sí lo están otras sociedades enfrentadas, por ejemplo, a procesos de crecimiento explosivo. Pero, si queremos fortalecer nuestra capacidad de proyectarnos hacia el futuro, debemos incorporar esta

perspectiva de análisis. Tenemos que encontrar respuestas para desafíos como el envejecimiento de la población y el insuficiente crecimiento de capital humano. Las políticas públicas pueden hacer mucho en este terreno.

 Desarrollo sostenible. La búsqueda del crecimiento de la economía uruguaya ha estado mayormente basada en el uso intensivo de recursos naturales, sin considerar suficientemente las consecuencias ambientales. Todavía no hemos prestado suficiente atención a la búsqueda de un desarrollo sustentable, con una matriz productiva más diversificada, comprometida con la innovación, conformada por cadenas con mayor valor agregado y empleo de buena calidad.

Una preocupación prioritaria debe ser el deterioro de la calidad del agua en todo el país. Las floraciones de algas tóxicas y la mortandad de peces como producto de la contaminación son cada vez más frecuentes, incluso en ríos de gran caudal y alto poder de autodepuración, como el Río Uruguay y el Río de la Plata.

Las 13 áreas protegidas existentes representan apenas el 0,6% del territorio y no son representativas de la diversidad de paisajes y ecosistemas del país. Este desbalance entre la modificación y la conservación de nuestra matriz natural atenta contra la sustentabilidad del desarrollo. Para revertir esta tendencia hacen falta nuevas estrategias de conservación, con prácticas de producción y urbanización sostenibles. El manejo de los residuos sólidos urbanos continúa siendo un problema pendiente. Casi el 90% de los sitios de disposición final fuera del área metropolitana se encuentran en condiciones inadecuadas debido a su localización, infraestructura o forma de operación.

Una fracción significativa de la biodiversidad del país enfrenta problemas de conservación. Este problema se ve agravado por desafíos como el posible inicio de mega-emprendimientos de minería a cielo abierto y el proceso de exploración de hidrocarburos (petróleo y gas) tanto *on-shore* como *off-shore* que pueden conducir a nuevas formas de actividad de alto impacto ambiental y social. Todo esto se suma a desafíos previos, como la fuerte



dependencia de los combustibles fósiles para cubrir las necesidades energéticas de sectores enteros como el transporte.

• Competitividad. La bonanza económica se está terminando y la nueva situación deja más a la vista que nunca el principal problema de nuestra economía: nuestros costos y nuestros niveles de productividad no nos están permitiendo ser competitivos. Eso está poniendo en peligro ramas enteras de actividad económica, como el turismo y la industria láctea. Si no resolvemos esta dificultad vamos a tener problemas graves, porque un país chico no puede sostenerse únicamente con lo que se venda en el mercado interno. Si no exportamos y no atraemos turismo, no vamos a poder sostener los niveles de bienestar y los horizontes de oportunidades que queremos asegurar a todos los uruguayos.

Mejorar los niveles de competitividad de nuestra economía requiere actuar en varios frentes: la política económica, el desarrollo de infraestructura, el comercio exterior, las relaciones laborales. En todos estos terrenos los gobiernos del Frente Amplio han hecho mal las cosas. Un manejo displicente de la economía enfrenta hoy al gobierno de Vázquez a un dilema malsano entre inflación y tipo de cambio. El fracaso de la PPP y el malgasto público han generado un país de carreteras colapsadas, trenes de carga inexistentes y puertos inadecuados. Una política exterior poco profesional e ideologizada nos ha dejado presos de un Mercosur que no funciona y aislados de los grandes circuitos del comercio mundial. El país necesita respuestas rápidas y contundentes en todos estos terrenos.

 Seguridad humana. El país necesita una verdadera política de seguridad humana, en un sentido amplio que incluya la protección social, la política de seguridad, la creación de mejores condiciones de convivencia y la seguridad vial. En Uruguay hay demasiadas víctimas y demasiado dolor causado por la desprotección, por la criminalidad, por el deterioro del clima de convivencia y por ese gran drama ignorado que son los accidentes de tránsito.

Para dar respuesta a este conjunto de desafíos tenemos que empezar por incorporar el concepto de protección social, entendido como el conjunto de políticas que permite aliviar a las personas y a los hogares frente a una serie de riesgos y necesidades que afectan negativamente su calidad de vida. Esta cobertura incluye el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento y la nutrición, y debe apuntar a diversos beneficiarios como la familia, los menores, los adultos mayores, los trabajadores afectados por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, las personas en situación de desempleo o precariedad laboral y las víctimas de adicciones. El concepto de seguridad humana también incluye una adecuada política de seguridad en sentido estricto, cuya aplicación se extienda a las calles y plazas, a los escenarios deportivos, a las cárceles y a los hogares para menores infractores. Hay una creciente demanda de los uruguayos en relación a estos problemas. En el año 2007, sólo el 9% de nuestros compatriotas señalaba a la inseguridad como el principal problema a resolver. En 2012, el 42% pensaba de esta manera. Este cambio del clima de opinión se debe al aumento del número de delitos y a la impunidad que los alienta. En el Uruguay del Frente Amplio, de cada cien delitos denunciados sólo se castigan entre 6 y 7.

Un tercer componente de la seguridad humana es la seguridad vial, que ha sido un tema desatendido en los últimos años pese a todo el dolor que provoca. Cada año mueren unas 570 personas por esta causa, y otras 28.000 sufren lesiones. La tasa de mortandad de 16,5 muertos por cada cien mil habitantes es una de las más altas de la región. La enfermedad traumática es la tercera causa de muerte en el país, y la primera entre los niños y jóvenes.

• Educación y ciudadanía. Los gobiernos del Frente Amplio multiplicaron por más de dos el presupuesto educativo y al mismo tiempo deterioraron los resultados. Tenemos una enseñanza que no incluye ni enseña. Tenemos una enseñanza que castiga a los más débiles. Tenemos una enseñanza presa de los intereses corporativos y de las rigideces ideológicas. Si no cambiamos el rumbo, las consecuencias de mediano plazo serán graves.

Así como la enseñanza pública contribuyó en el pasado a construir una sociedad integrada y capaz de ofrecer oportunidades, el funcionamiento actual nos va a empujar hacia una sociedad cada vez más desigual y fracturada.

El funcionamiento actual de nuestra enseñanza hipoteca las posibilidades de crecimiento del país y contra la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, porque nos impide contar con una fuerza de trabajo suficientemente calificada. Esto atenta contra la productividad y desalienta la inversión, especialmente en áreas con fuerte carga tecnológica. Pero además atenta contra las oportunidades de muchos uruguayos de ejercer ciudadanía e incorporarse a un debate público que nos permita construir un país mejor.

Una educación de mala calidad no nos convierte en un país mejor. Y es hora de decir que, para superar esta situación, tenemos que estar dispuestos a introducir cambios profundos. Hay que cambiar la institucionalidad de nuestra enseñanza, hay que renovar los enfoques pedagógicos, hay que revolucionar la formación docente. Y hay que hacerlo rápido, porque cada año que pasa sin cambios genera efectos negativos sobre cientos de miles de uruguayos.

Esta visión e cambio educativo no sólo debe abarcar la educación formal sino también la informal, con especial énfasis en la capacitación profesional, la acreditación y certificación de competencias adquiridas y la formación a lo largo de toda la vida de los trabajadores. Es irónico que este tema sea hoy tan deficitario, cuando el INEFOP dispone de varios millones de dólares que podría estar utilizando si tuviera claro un rumbo.

• Empleo sustentable. El empleo sustentable es una parte importante del desarrollo sustentable, entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. La idea central es que no alcanza con que la gente tenga hoy un empleo, sino que debemos generar el entorno para que ese empleo se conserve a lo largo del tiempo y ofrezca oportunidades reales de satisfacción y desarrollo personal. Para eso hace falta asegurar ciertas



condiciones como la estabilidad política, un diálogo social que asegure retribuciones dignas y buenas condiciones de trabajo, el buen gobierno de las instituciones públicas y de las empresas privadas, el respeto de los derechos humanos y de las normas internacionales del trabajo, la promoción del emprendedurismo y la creación de condiciones adecuadas para la inversión (lo que requiere, entre otras cosas, una política macroeconómica responsable).

El logro del empleo sustentable también requiere un país comercialmente integrado al mundo, una infraestructura que sostenga la actividad productiva (carreteras, puertos, vías férreas), el acceso a servicios financieros por parte de todos los agentes económicos (incluyendo cooperativas y pequeñas y medianas empresas) y un marco legal que asegura una competencia leal, en un marco de respeto de los derechos de propiedad y ausencia de prácticas anticompetitivas.

Sólo en un marco semejante puede aspirarse a empleos que, además de ser estables, estén asociados a salarios dignos y a oportunidades de desarrollo personal, al mismo tiempo que constituyan un camino para la inclusión y la justicia social.

• Investigación y desarrollo. Un país que crezca de manera sostenida y ofrezca oportunidades a sus habitantes tiene que ser un país capaz de innovar, en el sentido de aplicar el conocimiento a formas de actividad generadoras de valor. Nuestro país tiene un rezago en esta materia, aun respecto de los países mejor posicionados en América Latina. El dinero que destinamos a actividades de investigación y desarrollo representa actualmente menos del 0,5% del PBI. El registro de patentes de invención nos coloca por debajo del promedio de América Latina. Esto plantea restricciones a un país con vocación exportadora y orientado a ofrecer servicios complejos. Ciertamente tenemos experiencias positivas, como la industria del software, pero necesitamos fortalecernos y crecer en este terreno. Para eso hace falta una mayor inversión pública, pero también una mejor institucionalidad y un mayor desarrollo de nuestra capacidad de evaluación de proyectos.

• Cambio climático. El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI. En el contexto de una economía global, los efectos de esos cambios, la adaptación a las nuevas condiciones y el combate a problemas como el efecto invernadero requerirán esfuerzos de una inmensa magnitud. Las políticas públicas tienen un papel esencial a jugar en este terreno.

Si bien América Latina ha contribuido al cambio climático en menor medida que otras regiones, es muy vulnerable a sus efectos. Se estima que, para 2050, los costos económicos del cambio climático se situarán entre el 1,5% y el 5% del PIB regional.

El país debe prepararse para enfrentar este desafío. Debemos estimar sus repercusiones en el sector agropecuario, a causa del impacto en la productividad de los cultivos, la producción pecuaria y la forestación. Debemos anticiparnos a los cambios que se produzcan en la demanda y en la generación de energía. Debemos incorporar este factor en la gestión de los recursos hídricos. Debemos prever los posibles impactos sobre el turismo. Debemos estudiar los posibles impactos sobre la vida cotidiana de los uruguayos, incluyendo aspectos tan básicos como la vivienda y la alimentación.

Tener capacidad de antipación en relación a todos estos aspectos será esencial para asegurar una mejor calidad de vida a las generaciones presentes y, de manera muy especial, a las generaciones futuras.

 Derechos humanos. El marco normativo internacional fija compromisos y desafíos que nos comprometemos a asumir. Uno de estos últimos es fortalecer las capacidades tanto de los beneficiarios de los derechos como de quienes tienen que asegurar su ejercicio, sobre la lógica de que los derechos siempre conllevan obligaciones.

Las recomendaciones recibidas por Uruguay desde el Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos –ya sea emanadas de los Comités de Tratado, Mecanismos Especiales o del Examen Periódico Universal-



conforman una hoja de ruta que determina el posicionamiento en esta materia.

Probidad y transparencia. Los años de abundancia económica que hemos pasado se convirtieron en una fiesta de despilfarro de los dineros públicos. Los gobiernos del Frente Amplio tuvieron dinero como nunca y gastaron mal. El gobierno pasó de administrar unos 3.800 millones de dólares en 2004 (ingresos del sector público no financiero) a administrar 16.600 millones en 2014. Sin embargo, el déficit fiscal actual es igual al que había a la salida de la crisis de 2002. Esto se debe a que se tomaron malas decisiones (como ilustran los casos de PLUNA, ANCAP y ANTEL), pero también a que se relajaron los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas de la República ha sido tratado por los gobiernos del Frente Amplio como si fuera un elemento decorativo. Todo esto se tradujo en precios, tarifas e impuestos que castigan el bolsillo de los uruguayos. Por eso es esencial recuperar la probidad administrativa y trabajar para una mejora de la calidad del gasto público. El país no puede darse el lujo de seguir teniendo los combustibles más caros de la región. Los uruguayos no pueden seguir viviendo bajo la amenaza de más impuestos, justo cuando empiezan a perfilarse amenazas sobre el empleo y sobre el ingreso. Nosotros queremos menos impuestos y una mejor administración. Por eso vamos a controlar de cerca lo que ocurra en estos años y desde ya empezamos a prepararnos para hacerlo mejor. Parte de este trabajo consistirá en la construcción de un marco normativo más riguroso, que contribuya a prevenir y a combatir los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. También hace falta mejorar los procesos de gestión gubernamental (tanto a nivel nacional como local) y reformular el marco de relacionamiento de los sectores público y privado. Todo esto redundará en formas de gestión y gobierno más transparentes y democráticas, en mejores estándares éticos y en mayor legitimidad.



b) Un Partido Nacional fortalecido y renovado

El cumplimiento de esta agenda de trabajo requiere un Partido Nacional fortalecido y renovado como organización. Tenemos un instrumento formidable que existe desde hace casi 180 años. A lo largo de su historia, este instrumento se ha ido adaptando a las diferentes épocas y a los diferentes contextos. Ese es un desafío que también tenemos hoy. Por eso queremos apoyar al Directorio en el esfuerzo por ajustar la estructura partidaria a los desafíos del presente. Queremos hacerlo con energía y con generosidad, porque no nos interesa ser un sector fuerte en un partido que pueda volverse débil. Aspiramos a ser un sector fuerte en un partido cada día más fuerte.

Un Partido Nacional fuerte es un partido con una **estructura territorial** activa en los 19 departamentos, que marque presencia, recoja inquietudes y propuestas, actúe a nivel local y proporcione orientaciones a la dirigencia nacional.

Un Partido Nacional fuerte es un partido en **diálogo con la sociedad**, presente en los gremios y sindicatos, en las organizaciones barriales, en los movimientos sociales y en la vida cultural, como estamos lanzando aquí.

Un Partido Nacional fuerte es un partido que se ocupe de **formar permanentemente a sus militantes y dirigentes**, ayudándolos a entender mejor los problemas, a aprender de experiencias ajenas y a tener una mejor comprensión de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia.

Un Partido Nacional fuerte es un partido con una **sólida base técnica** que le permita procesar información, hacer análisis en profundidad de temas complejos, evaluar el impacto de las políticas públicas y generar propuestas.

Un Partido Nacional fuerte es un partido profesionalizado en el manejo de su comunicación, con el fin de mantenerse en permanente diálogo con todos los uruguayos.

Para avanzar en esta dirección, estamos dispuestos a aportar nuestra energía, nuestra gente y nuestras ideas. No creemos que nuestra fortaleza como sector se construya

retaceándole apoyos al partido. Creemos, por el contrario, que cuanto más fuerte y vivo esté el partido, más fuerte y vivo estará nuestro sector. Por eso nos proponemos apoyar este proceso de renovación y fortalecimiento organizativo sin condiciones y sin cálculos.

c) Un partido con vocación de gobierno

Somos un sector con vocación de gobierno, y estamos convencidos de que lo mejor que le puede pasar al país a partir de 2020 es un gobierno del Partido Nacional. No estamos solamente para controlar al gobierno del Frente Amplio ni para ejercer influencia desde la oposición. Sabemos que esas actividades son muy importantes para la vida democrática, y estamos decididos a ejercerlas con energía y responsabilidad. Pero nuestra consigna sigue siendo la misma: queremos gobernar, y gobernar bien.

Todo gobierno, desde luego, empieza por ganar las elecciones. Ese es nuestro gran objetivo para el año 2019 y hacia allí tenemos que orientar nuestras energías. Pero no queremos ganar de cualquier manera.

Hoy empezamos a movernos para mejorarnos a nosotros mismos en cada uno de estos rubros. Tenemos que definir estrategias comunes y ponernos en condiciones de aplicarlas. Pero antes de eso tenemos que escuchar sugerencias, aprender de la experiencia de nuestros militantes y de la quienes han ejercido o ejercen cargos de gobierno, y de la sociedad civil. Porque la victoria electoral del año 2019 se construye EntreTodos y desde hoy.